



Protesta de las entidades que atienden a los ancianos, ayer en la plaza Sant Jaume de Barcelona. / ALBERT GARCIA

La parálisis económica del Govern pone en jaque la atención a los ancianos

JESSICA MOUZO, Barcelona

Las entidades que atienden a los ancianos se plantaron ayer contra el Govern. Después de varios años reclamando mejoras laborales y una inyección económica para aliviar la presión del sector, patronales y sindicatos que trabajan con gente ma-

yor —muchos, grandes dependientes— se han conjurado para denunciar la falta de propuestas y soluciones por parte de la Generalitat. La parálisis económica del Ejecutivo, que acumula dos años de prórroga presupuestaria, impide echar que arranquen las peticiones urgentes que reclama el sector.

Las entidades llevan tiempo denunciando una situación de “colapso”. Las listas de espera para una residencia se alargan varios años y el circuito de la Ley de Dependencia está saturado: uno de cada tres dependientes aún no ha recibido la prestación y, en ese limbo burocrático, 24.751 personas fallecieron en Cataluña desde 2011 aguardando ser valoradas con un grado de dependencia o esperando la ayuda asignada.

Pero a todo ello, advierten desde el sector, hay que sumar la falta de recursos para mejorar las condiciones laborales del personal. Las tarifas llevan 10 años congeladas y los sucesivos gobiernos no han incrementado los precios para hacer frente a las mejoras salariales vinculadas a los convenios colectivos, la actualización al alza del índice de precios al consumo (IPC) o el IVA. En 2017, la patronal de las residencias, Acra, ya lanzó la alerta por la situación financiera que viven sus centros: según sus cifras, mientras las tarifas públicas permanecían estancadas, los gastos de las residencias crecieron un 11%. Acra reclamó 300 millones de euros pero, tres años después, se quejan de que no ha llegado ni un euro.

La gota que colmó la paciencia de las entidades fue la última reunión con el consejero de Asuntos Sociales, Chakir El Homrani, la semana pasada. Patronales y

Una escuela para un millar de cuidadores

La escuela de cuidadores de La Caixa ha atendido a 1.105 cuidadores voluntarios y familiares de enfermos avanzados en su primer año de funcionamiento con la realización de 231 talleres dando atención “emocional, social y espiritual”.

La mayoría de usuarias fueron mujeres, esposas e hijas mayores de 65 años, interesadas en formarse en el trato a sus familiares enfermos. La escuela de cuidadores enseña a los participantes a desprender emociones sanas, ya que cualquier emoción del cuidador se traslada al familiar enfermo.

sindicatos esperaban que, seis meses después de pactar con el Govern la creación de una hoja de ruta para mejorar la situación del sector, El Homrani se sentase con un paquete de medidas económicas para paliar las dificultades que viven las entidades. Sin embargo, según Cinta Pascual, presidenta de Acra, el consejero solo propuso una unificación pro-

gresiva de las tarifas para los dependientes de grado II y grado III —según el nivel de dificultades, a los dependientes se les agrupa en grado I (moderado), II (severo) y III (alto dependiente)—. Esto significa que, en tres años, el precio que cobra una residencia por atender a un dependiente de grado II (1.656 euros al mes) se igualaría a lo que cobra por un grado III (1.864).

Falta de profesionales

Esta medida, asegura Pascual, no era nueva. Estaba negociada y pactada con el Govern desde 2017 y, además, no soluciona la situación de las plantillas. “Dentro de poco no se encontrarán profesionales para trabajar en este sector. Están cobrando 985 euros de salario bruto. Tenemos problemas para encontrar gerocultores”, explicó ayer Javier Moreno, de UGT, durante una concentración en la plaza Sant Jaume de Barcelona, donde está la Generalitat. El sector pide equiparar salarios con los trabajadores de residencias públicas. “Los sueldos son un 20% más elevados en la pública. Estamos en un proceso de emergencia social muy importante. Cuesta encontrar profesionales y hay mucha movilidad en un sector que trabaja con un colectivo muy vulnerable que requiere estabilidad en el trato”, sostiene Roser Fernández, presidenta de la patronal La Unió.

Asuntos Sociales, por su parte, achaca la falta de recursos en dependencia a la infrafinanciación del Estado y a la congelación de las partidas desde 2011. “El Estado aporta el 13% del total de aportaciones públicas y la Generalitat, el 87%”, señala el Departamento en un comunicado. Sin embargo, esta respuesta no convence a las entidades, que apuntan que este escenario se da en todas las comunidades autónomas y Cataluña está a la cola en la puesta a punto del sistema de la dependencia.

El Govern agrega que su prioridad estos años ha sido crear más plazas en residencias para aliviar la lista de espera —3.500 más entre 2017 y 2019, apunta— y reforzar la atención domiciliaria. Con todo, admite, “tanto la falta de financiación estatal como el actual marco de prórroga presupuestaria por segundo año consecutivo condicionan fuertemente la capacidad del Govern de dar una vuelta a la financiación de la dependencia”.

Prioridades políticas

Las sucesivas prórrogas presupuestarias —las últimas cuentas aprobadas son las de 2017— han dejado poco margen a la Administración. Pero la presidenta de la patronal La Unió recuerda que, incluso en prórroga presupuestaria, “se hicieron arreglos para atender sus demandas cuando el pasado noviembre salieron a la calle médicos, bomberos y maestros”. “Si hay una prioridad, hay mecanismos para redistribuir partidas o sacar fondos adicionales. Parece que si no sales a la calle y paras el servicio, no se toman decisiones”, lamenta.

Según las patronales, la falta de financiación ya está pasando factura también a los equipamientos y a los ratios de profesionales, porque los pacientes que llegan a las residencias son cada vez más complejos. “Esto es un tema financiero, pero muy vinculado a los problemas para retener a profesionales”, zanja Fernández. El Govern apunta que las conversaciones con el sector continuarán la semana que viene.

El Parlament veta el retorno de menores migrantes que delinquen

AGENCIAS, Barcelona

El Parlament rechazó ayer pedir al Govern la devolución a sus países de origen de menores migrados sin referentes familiares que cometan delitos. Con 92 votos en contra (ERC, JxCat, comunes y la CUP), cuatro a favor (PP) y 36 abstenciones (Cs), la Cámara tumbó el punto de una moción popular que pedía “ante la comisión de actos delictivos por parte de menores, llevar a cabo las gestiones necesarias con el Gobierno de acuerdo con los convenios internacionales suscritos, para conseguir el retorno a sus entornos familiares”.

No obstante, el pleno aprobó instar al Govern a evitar concentraciones numerosas de jóvenes y adolescentes migrados en un mismo centro de acogida y pidió presentar ante el Parlament un informe trimestral sobre la situación de estos chavales. El diputado del Partido Popular Santi Rodríguez criticó la “creación de forma precipitada” de centros de acogida para abordar la situación y acusó al Govern de llevar a cabo una gestión poco transparente.

Muere un hombre apuñalado en una pelea en el Raval

EL PAÍS, Barcelona

Un hombre murió ayer por la noche en el hospital Clínic de Barcelona después de una pelea en la calle, en el Raval. El incidente ocurrió sobre las 21 horas en la plaza Josep Maria Folch i Torres del barrio barcelonés. Por causas que se desconocen, comenzó una discusión entre dos personas. El presunto agresor fue a comprar un cuchillo, regresó al lugar y apuñaló a la víctima. Ambos son de mediana edad y de origen magrebí, según fuentes de la investigación.

El hombre herido fue atendido por el Sistema de Emergencias Médicas (SEM), que le practicó maniobras de reanimación. Presentaba un corte en el pecho de unos 15 centímetros de largo y de tres centímetros de profundidad. Tras el incidente, ingresó en estado crítico en el hospital Clínic, donde falleció alrededor de las 23 horas.

Los Mossos d'Esquadra trataban de localizar al homicida, al que ya tenían identificado.